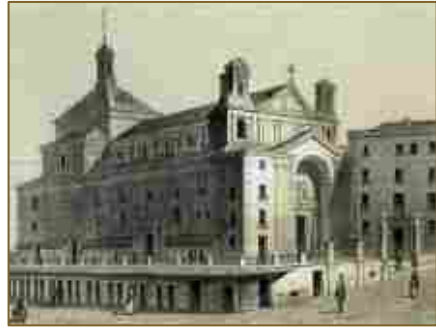


El mentidero de la Villa de Madrid



Mentidero de las Gradas de San Felipe el Real

Nº 745 Viernes 28 de Abril de 2023

Se comenta en los mentideros madrileños...

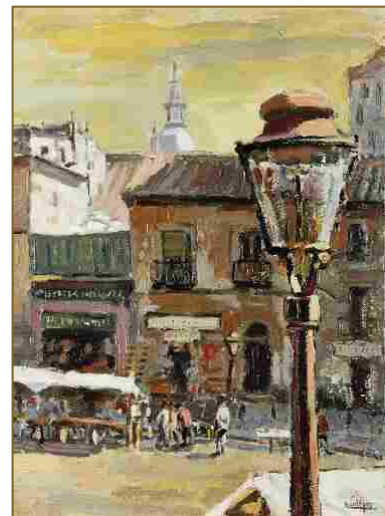
- ✚ **Una sesión de preguntas**, *Emilio Álvarez Frías*
- ✚ **Odio después de la muerte**, *Juan Van-Halen*
- ✚ **La otra parte de la memoria**, *José M^a García de Tuñón Aza*
- ✚ **Vindicación de José Antonio**, *José Javier Esparza*
- ✚ **La divertida burla de Feijóo Sánchez que roba una sonrisa a los ministros del PSOE**, *José Antonio Puglisi*
- ✚ **In dubio pro okupa**, *Guadalupe Sánchez*
- ✚ **La industria española y el tabú nuclear**, *Jesús Cacho*

Una sesión de preguntas

Emilio Álvarez Frías

En todos los hechos y en todos los comentarios, cabe recurrir al dicho de que nunca es tarde si parió la abuela, o a otro menos abrupto de que todos los santos tienen octava. En esta ocasión, en el mentidero del Rastro madrileño, en Casa Pepe, estaban comentando la última sesión de control del gobierno cuando aparecí por allí a saludar a los amigos y participar en sus inquietudes, sintiendo no disponer de tiempo para intervenir más frecuentemente en ellas, como sería mi deseo.

Al entrar, no me extrañó un pelo escuchar a doña Rita comentar cómo de vez en cuando alguno de sus señorías se quede dormido en plena sesión, lo que no la extrañaba dado lo aburrido que podía ser cuando tomaba la palabra Pedro Sánchez. En fotos de prensa ya se había visto, en más de una ocasión, cómo roncaba plácidamente más de un miembro del Parlamento – varones y hembras, que no se les olvida lo de la igualdad de la Montero y la



Belarra ni para esto— mientras otros disimulaban estar consultando los papeles que tenían en el atril del escaño para dar una boqueada somnolienta con la que despejar el tedio. ¿Razón? Que no son pocos los parlamentarios plastas sin atributos para el discurso que se meten en el zurullo; otros resultan aburridos al leer lo que quieren decir porque les falta gracejo para soltarlo directamente, y muchos carecen de fundamento para exponer lo que pretenden, pues se lo ha dado escrito el jefe de filas y él, leyéndolo mal que bien, hace lo que puede. Peores son los que discursen mucho sin decir nada interesante, o soltando mentiras, en lo que se repiten constantemente, o inventando lo que tratan de colar en el cerebro del resto de los parlamentarios. Este es el caso de Pedro Sánchez; sus discursos dicharacheros —no son otras cosas— normalmente no tienen fundamento, por todos los lados se ve cómo resbala la grasa que los rodea, hasta el punto de que a medida que cuenta sus chocarrerías los parlamentarios listillos —suyos o de la oposición— ya están comparándolo con la verdad y les entran no pocas ganas de saltar del escaño para taponarle la boca, aunque los contiene la nómina de fin de mes y su incapacidad para hacer otra cosa.

En el cambio de impresiones entre los de una mesa y los de otra donde se jugaba alas cartas, el «Trucha» metió baza para recordar la pasión con la que



habla el Presidente de que su economía es la mejor de no sé cuánto tiempo, que la derecha no tenía ni idea de cómo llevarla a cabo, olvidando él el número de empresas y autónomos que habían echado el cierre durante su mandato, los cientos de miles de millones de euros con los que había engordado la deuda del estado, la cantidad de jóvenes

parados que no saben hacer nada mientras las empresas echan de menos a gente que esté formada en trabajos manuales, cómo gracias a su galanura ha engordado de enchufados y familiares la administración pública, cómo las empresas emigran y la gente bien preparada del país busca en el extranjero su subsistencia en puestos que aquí son dados a chupones ignorantes; un desastre, y mientras vemos todo ese desastre, el presidente asegura que el PSOE «gestiona mejor la economía» que el PP, ¡tendrá cara! Termina diciendo «El Trucha».

Ricardo, el «guarnicionero», hombre moderado, echó un cuarto a Santiago Abascal haciendo referencia a cuando éste preguntó a Pedro Sánchez sobre sus comidillas con Mohamed VI sobre el Sahara y otros trapicheos que deben desprenderse del móvil misterioso; y eso cuando el Mohamed no tiene tiempo para recibirle y charlar con él porque al marroquí le gusta más París y el jolgorio que a un yanqui una vedete del Molino Rojo en sábado.

Lo peor es cuando en el Parlamento habla ese chico de ERC, que es lo más aburrido que ha parido madre –la suya de Turón (Granada) con la colaboración de padre de Alcaudete (Jaén)– en defensa de la independencia de Cataluña, haciéndose el listo con los juegos de palabras que utiliza como si quisiera entontecer al respetable; o los representantes de ETA y del PNV que siempre están metidos en el juego de ir consiguiendo todo lo que quieren a base de prestarle una ayudita a Pero Sánchez en sus tropiezos, olvidando éste los 900 muertos que sus amigos han ido dejando por el camino, opina Martínez, un socialista de toda la vida que no se pierde un día de pasar por Casa Pepe a darle a las piezas de dominó.

Además –interviene «El Paleta»–, esos tipos son unos inútiles. Yo no sé si sabrán mucho, pero allí están solo para decir amén a lo que les mande el partido, por lo que su asistencia está de más y nos cuesta un pastón tanta gente allí sentada, y eso no siempre, ya que, da la sensación, de que si no se lo ordena el jefe se quedan en casa viendo los rollos de la tele o el fútbol... A mí que me den tipos que estén todo el día currando como hago yo, que nadie me da para que el niño tenga todos los días habichuelas para comer.

Por aquello de no ser un mirón, aprovecho que vengo de escuchar a Pedro Sánchez en el Senado, y les suelto que el presidente se ha despachado con un discurso de una hora, ha contado las mismas patrañas de siempre con la propina de que ha prometido otras 20.000 casas más,... lo que impelió a que algún asistente soltara *sotto voce* algún taco...


Y entre partida de cartas, de dominó en otras ocasiones, discurre la tarde del mentidero de Casa Pepe, el bar más conocido del Rastro madrileño.

Odio después de la muerte

José Antonio no intervino en la guerra, no fue de nadie siendo de todos. Intentó arbolar una izquierda nacional avanzada en lo social, respetuosa con los valores y defensora de la unidad de España

Juan Van-Halen (*El Debate*)

Escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando

 i unimos escaso talento, invasiva ideología, rampante soberbia, resucitado odio, manipulación histórica, anacronismo vengativo, no reconocidos errores, pactos anti-España, deplorable gestión y el aderezo de mentiras continuadas, del cóctel saldrá la delirante definición del actual Gobierno. Una de las más absurdas y dañinas consecuencias de tal mixtura es la cobarde persecución a los adversarios muertos. Se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos con parafernalia propagandística, primera preocupación del Gobierno en todas sus iniciativas. Franco no quería ser enterrado en aquel lugar; fue iniciativa de Juan Carlos I. Ahora está en Mingo-rubio, en el panteón que él deseaba.

Ayer se exhumaron los restos de José Antonio Primo de Rivera –es su cuarto traslado– depositados en el panteón de la Sacramental de San Isidro. La iniciativa familiar ha impedido la parafernalia propagandística gubernamental.

Él dispuso en su testamento ser enterrado en lugar sagrado y el cementerio del Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, es, por decisión del Gobierno a través de la Ley de Memoria Democrática, cementerio civil, sin consultar a las familias de los miles de enterrados allí; buena parte de ellos querrían descansar en lugar sagrado. La delicadeza del Gobierno es inexistente.

José Antonio –que está en la historia sólo con su nombre de pila– fundó Falange Española en octubre de 1933, se presentó a los comicios de noviembre de ese año en una coalición derechista y ganó escaño, pero su partido, muy minoritario, no consiguió representación en las elecciones de 1936. Encarcelado por un motivo partidista y menor, fue juzgado por rebelión militar, condenado a muerte y fusilado, a los 33 años, en la prisión de Alicante, amaneciendo el 20 de noviembre de 1936. Formaban el Tribunal representantes de partidos del Frente Popular. El principal y último cargo –rebelión militar– era ya vergonzoso porque José



Antonio estaba encarcelado desde marzo. Largo Caballero, el Lenin español, jefe del Gobierno, adelantó la ejecución para evitar enfrentamientos en el seno del Gabinete.

Prieto no era el único ministro que se oponía al cumplimiento de la pena. El preceptivo «enterado» del Gobierno no existió; llegó antes la noticia del fusilamiento. Conservo una grabación televisiva en la que, en presencia de José Prat, Aranguren y Serrano Suñer, entre otros, Fernández-Cuesta, albacea del fusilado, contó que estando él en la prisión de Valencia el propio Prieto le convocó y le aseguró que detrás de la ejecución estuvo Largo Caballero –al que llamó «animal»–. Al adelantarla provocó un hecho consumado y evitó el debate.

Desde joven me interesé por el personaje José Antonio y leí sus escritos. Calado romántico y pensamiento consecuente. Entonces no sabía que escribía versos, y apreciables. Ya me gustaría que sus adversarios post mortem le hubiesen leído como yo he leído a aquellos cuyas ideas no comparto. Es pedir demasiado. Sus adversarios contemporáneos sí le leyeron y dejaron opiniones sobre su pensamiento y personalidad. Por razones de espacio sólo reproduzco algunos ejemplos.

Desde joven me interesé por el personaje José Antonio y leí sus escritos. Calado romántico y pensamiento consecuente. Entonces no sabía que escribía versos, y apreciables. Ya me gustaría que sus adversarios post mortem le hubiesen leído como yo he leído a aquellos cuyas ideas no comparto. Es pedir demasiado. Sus adversarios contemporáneos sí le leyeron y dejaron opiniones sobre su pensamiento y personalidad. Por razones de espacio sólo reproduzco algunos ejemplos.

Diego Martínez Barrio, que había sido ministro y presidente del Gobierno, y cuando sucedió lo que relata era presidente de las Cortes, en una conferencia pronunciada en México en 1941, contó una conversación de su amigo Martín Echeverría con José Antonio en la cárcel de Alicante en la que le recalcó «la necesidad de que se pusiese fin a la contienda porque creía como español que sumiría a España en el caos y la ruina» y que «se le permitiera una gestión

en el campo rebelde, del que volvería bajo palabra de honor, orientada a la terminación de la guerra civil».

Julián Zugazagoitia, luego ministro y en noviembre de 1936 director de *El Socialista*, escribió, ya en el exilio, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, originalmente titulado *Historia de la guerra en España*. El libro supone un esfuerzo de objetividad desde un socialismo moderado; era muy cercano a Prieto. De tenido en París y entregado por la Gestapo, fue juzgado, condenado a muerte y fusilado el 9 de noviembre de 1940. Sobre José Antonio en la prisión, escribe: «En las horas de encierro tejía sueños de paz: esbozaba un gobierno de concordia nacional y redactaba el esquema de su política. Temía una victoria de los militares. Eso era, para él, el pasado. Lo viejo. La España del siglo XIX prolongándose, viciosamente, en el XX. Él había ido a injertar su doctrina, confusa, en las universidades y en las tierras agrícolas de la vieja Castilla».



José Antonio y Prieto, ministro varias veces, representante del ala moderada del PSOE, tenían una relación cordial. Tras oponerse a la ejecución fue depositario de los papeles y pertenencias del preso de Alicante, que entregaría a la familia. En su artículo «Si Primo de Rivera viviese», *El Socialista* (15-8-1957), escribe: «Acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias que quizás fueran fundamentales, y medir las divergencias, probablemente secundarias, a fin de apreciar si éstas valían la pena de ventilarlas en el campo de batalla».

En esta España obtusa en la que muchos jóvenes no saben sino lo que les cuentan o les dejan saber desde leyes de desmemoria que un próximo Gobierno habrá de derogar, para la generalidad José Antonio es un desconocido, y perseguirle *post mortem* supone una venganza anacrónica y una cobardía miserable. José Antonio no intervino en la guerra, no fue de nadie siendo de todos. Intentó arbolar una izquierda nacional avanzada en lo social, respetuosa con los valores y defensora de la unidad de España. No le dio tiempo.

La otra parte de la memoria

José M^a García de Tuñón Aza



En estos días pasados para los que guardamos un grato recuerdo y admiración por todo lo concerniente a la historia del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, hemos quedado sorprendidos de cómo algunos alhelados están tratando su memoria. Sobre todo, cuando el odio de los herederos de las ideas políticas que lo han asesinado, no han tenido ahora ningún reparo en sacarlo de su tumba –circula por las redes

un Twitter de Izquierda Unida que dice: «José Antonio, calienta motores que sales»—. Cuando el odio llega a esos límites convirtiéndose todo ello en una tragedia griega, uno no acaba de entender que, después de tantos años, haya gente que siga escribiendo de esa manera. Y no son los únicos, porque algunos escritores han publicado textos horripilantes. Incluso algún representante de la Iglesia ha dicho: «no tenemos nada que decir porque los restos pertenecen a una familia y la familia decide donde entierra a su difunto». Cierto es, pero para su exhumación necesita el permiso de quien sea la máxima autoridad eclesiástica del lugar donde reposaban sus restos, o sea, la máxima autoridad de todo lo que afecta a la Basílica donde millones de personas hemos, algún día, rezado por ese hombre que no hizo mal a nadie, pónganse como se pongan todos esos que siguen llevando el rencor y el odio dentro de su cuerpo. Mientras tanto, al mayor responsable de su asesinato, Largo Caballero, le han levantado un monumento en Madrid junto con Indalecio Prieto, ambos responsables de la Revolución del 34 donde tantos asesinatos se cometieron, entre ellos, varios religiosos que ningún mal habían hecho. Incluso algunos eran seminaristas.

Pero ahora, quisiera recordar a toda esa serie de vividores que, han aprovechado esta ocasión, para escribir y hablar mal de José Antonio. Por eso les pediría que escriban algo de la otra memoria histórica. Voy a darles alguna pista. En este caso, de un libro que se publicó hace tiempo. Su título: *El hábito y la cruz*, de Gregorio Rodríguez Fernández. Éste recoge los actos de salvajismo y barbarie que, con algunas



monjas, cometieron los rojos durante la guerra civil. Fueron los padres o abuelos ideológicos de los que ahora aplauden por haber conseguido sacar los restos del fundador de Falange, del lugar donde descansaban hasta ahora. El propio ministro de la Gobernación, durante la II República, Ángel Galarza, tuvo que dictar disposiciones para tratar de frenar aquella ola de terror. Pero a pesar

de todo ello, las persecuciones, encarcelamientos, condenas y torturas en las checas, continuaron, en cierto modo, amparadas por la ley. Las acusaciones a la Iglesia y a sus ministros fueron constantes, así como las indagaciones para dar con el paradero del mayor número de sacerdotes, religiosos y religiosas, que, por el mero hecho de serlo, ya merecían un juicio condenatorio. Las iglesias y los conventos, como también los colegios de la Iglesia, como también los colegios de la Iglesia, fueron ocupados y saqueados.

De todos los asesinatos de monjas que relata el libro citado, hay uno que destaca sobre todos por ser el más cruel y sobrecogedor de los crímenes cometidos en unas mujeres que su mayor delito era vestir hábito de religiosa y lle-

var sobre su pecho la Cruz de Cristo. Se llamaba esta mártir, Apolonia Lizárraga de Zabalegui (Madre Sacramento), nacida en 1867 en Lezáum, lugar del municipio de Yerri en Navarra, y en el momento de su asesinato era la superiora general de las carmelitas de la Caridad y que ha sido una más de las 283 monjas asesinadas durante la guerra civil.

Las circunstancias que se conocen de su muerte indican que la madre general, detenida en la checa de San Elías, es que fue descuartizada y aserrada viva, echando más tarde su cuerpo para ser devorado por los cerdos. Al parecer,



el jefe de la checa, conocido como «El Jorobo de San Elías», engordó a varios cerdos con carne humana de las víctimas que sacrificaba. Lo cierto es, que el cadáver de Apolonia Lizárraga jamás apareció. El largo camino hacia su martirio había comenzado el 20 de julio en la casa madre de Vic donde sería interrogada porque suponían que como superiora tendría en su poder el dinero de la congregación.

Ante el peligro que corría se trasladó a Barcelona donde se pensaba que pasaría más desapercibida, pero no fue así porque a principios del mes de septiembre fue detenida y asesinada entre los días 8 y 9 de septiembre.

La causa de su beatificación fue iniciada, en un principio, juntamente con las 24 carmelitas muertas en Valencia, promovida por el Arzobispado de esta capital el 11 de marzo de 2001. Sin embargo, posteriormente, fue desgajada de la misma para ser incluida en la promovida por el Obispado de Barcelona para un conjunto de sacerdotes, religiosos y religiosas de la diócesis, la cual ha sido presentada hace algún tiempo en Roma hasta que el 28 de octubre de 2007 fue beatificada por Benedicto XVI.

También el obispo Antonio Montero Moreno en su magnífico libro *Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939*, escribe sobre la muerte de esta monja: «No cabe duda de que entre las religiosas sacrificadas en Barcelona la que figura con más relieve es la entonces general de las Carmelitas de la Caridad, Rvdma. M. Apolonia Lizárraga del Santísimo Sacramento».

Vindicación de José Antonio

Una sociedad que profana tumbas y despoja a los cadáveres es una sociedad bárbara

José Javier Esparza (*La Gaceta de la Iberosfera*)

España ha venido a menos por una triple división: la división engendrada por los separatismos regionales, la división engendrada por los partidos y la división engendrada por la lucha de clases. Eso decía José Antonio Primo de Rivera en el único documento audiovisual que de él se con-

serva. Cuando España –añadía el fundador de Falange– encuentre una empresa que le permita superar todas esas diferencias, «volverá a ser grande como en sus mejores tiempos». El análisis bebía claramente en las tesis de Ortega, entre otras, y era ampliamente compartido en la España de los años 30. El problema era cómo suturar esas tres divisiones: regiones, partidos, clases. La II República, evidentemente, fracasó de manera trágica en el intento. Aún peor: estimuló todas esas divisiones. El resultado fue una guerra civil. Y en el curso de esa guerra civil, el Frente Popular fusiló a José Antonio.



José Antonio (a su lado, Julio Ruiz de Alda, asesinado por los rojos en agosto de 1936) en la manifestación por la unidad de España, celebrada en Madrid el 5 de octubre de 1935, primer aniversario de la revolución bolchevique de Asturias y de la proclamación, por Companys, de la independencia de Cataluña.

A José Antonio Primo de Rivera lo fusilaron un 20 de noviembre de 1936 por conspiración y rebelión. La verdad es que el fundador de Falange llevaba en la cárcel desde el mes de marzo. Lo habían encerrado por posesión ilegal de armas, argumento que no dejaba de ser hilarante en una España donde todo el mundo llevaba armas, especialmente las milicias de la izquierda. Después, el Gobierno del Frente Popular

puso especial empeño en que permaneciera en prisión. Cuando estalló la guerra, se le sometió a una parodia de juicio según el modelo bolchevique implantado por los socialistas y sus socios. Un jurado de milicianos le condenó a muerte. El gobierno de Largo Caballero desoyó cualquier petición de indulto. Así José Antonio se convirtió en la víctima por antonomasia: condenado por unos delitos que no tuvo oportunidad de cometer.

Hoy, ciento veinte años después de su nacimiento, ochenta y seis años y medio después de su asesinato, sesenta y cuatro años después de su inhumación en el Valle de los Caídos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha forzado la exhumación del cadáver de José Antonio. Dicen las fuentes gubernamentales que es una forma de «cerrar heridas». ¿Demencia o desfachatez? Ambas cosas. También ignorancia. La televisión pública adornaba esa misma mañana la información del suceso con un retrato de... Miguel Primo de Rivera, su padre. Qué grotesco todo, qué infame esperpento.

Sobre la víctima. José Antonio fue asesinado en 1936. Pronto hará 90 años. Es decir que hace falta una psicología un tanto particular –enferma– para convertirlo en un enemigo político vigente. Hoy José Antonio es, ante todo, el testimonio de un tiempo –un tiempo pasado–. Uno de los mejores escritores de su generación, sin duda. Un líder con singular capacidad de atracción, también. Un depósito de ideas que siguen siendo sugestivas. Y un perfecto ejemplo de la tragedia de un tiempo y un país. Pero no un oponente político. Lo racional

sería mirarlo con los ojos de la Historia. Pero nada en la caterva que nos gobierna es racional, ni siquiera su voluntad de poder. O quizá sí, quizá exista una suerte de racionalidad perversa (pervertida) en esa calculada siembra de odio que permite manipular los peores instintos del ser humano.

Sobre las exhumaciones. La cultura, como es sabido, descansa en el culto a los muertos. Es lo que da la medida de la hominización.

Una sociedad que profana tumbas y despoja a los cadáveres es una sociedad



bárbara. Cuando a Carlos I, vencedor, le ofrecieron abrir la tumba de Lutero en Wittenberg, se negó en redondo: habría sido un gesto profundamente indigno. «Ha encontrado su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos», dicen que dijo el César. Sólo las hordas revolucionarias (jacobinas, bolcheviques, etc.) han encontrado pla-

cer en esas cosas. Normalmente, antes de terminar matándose a sí mismas.

Sobre los profanadores. Son gente lamentable, sin duda, pero aún más lamentable es el rebaño que bala tras el burro. Es profundamente indignante la impostura de esa gente que se envuelve en banderas rojas mientras vende el país a los fondos de inversión transnacionales, a los separatistas de todo color o al mismísimo rey de Marruecos si hace falta. Y casi duele la irracionalidad ciega de esos que se dejan engañar por los fulleros para saciar sus instintos de rencor y furia. Estamos viviendo una apoteosis del mal y de la ignorancia. Objetivamente, nos hallamos en uno de los momentos más bajos del nivel histórico de los españoles.

Y sobre los cómplices. Sí, los cómplices. Porque nada de todo esto habría sido posible sin la anuencia pastueña de la Conferencia Episcopal, de esa Iglesia que, para desolación de los fieles, coadyuva en la profanación de las tumbas en sagrado. El signo distintivo de la Iglesia del siglo XXI es la traición a los cruzados.

«España ha venido a menos por una triple división...».

¿José Antonio Primo de Rivera? Presente, después de todo.

La divertida burla de Feijóo a Sánchez que roba una sonrisa a los ministros del PSOE

El líder del PP desmonta el discurso de más de una hora del presidente del Gobierno con una simple pregunta

José Antonio Puglisi (*Periodista Digital*)



lberto Núñez Feijóo se movió como un tiburón en el Senado.

En el debate, el líder del Partido Popular «olió la sangre» de un malherido Pedro Sánchez que mantuvo una intervención de más de una hora

para redundar en temas estériles y en promesas falsas. Muchas palabras, pero poco contenido. Algo que no perdonó el «popular» en su turno de palabra.

El político gallego empezó con fuerza. Tras saludar al presidente del Gobierno, también lo hizo con sus ministros, sobre los que dijo con ironía: «Me sorprende verles a todos acá, ya que con la que están liando aún siguen en sus puestos... es asombroso».

Tras denunciar que el líder del PSOE lleva 400 días ocultando información de la guerra de Ucrania y utilizando el conflicto para justificar la pésima situación económica del país, Feijóo reprochó que Sánchez no admitió que «aún no recupera el PIB previo al COVID», que «seamos líderes del paro en la Unión Europea» o que «sea el presidente con la mayor deuda en los últimos 44 años de democracia».

De inmediato le echó por tierras sus falsas promesas. Mientras el presidente del Gobierno anunciaba a bombo y platillos que se realizarán 20.000 propiedades en terrenos en manos del Ministerio de Defensa, el líder del PP fue contundente:

¿De qué presume usted?, habla de unas 20.000 viviendas que no las hace, ni las hará, ya que las competencias de vivienda están en manos de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos,



le recordó.

De la misma forma, le recordó al líder socialista que no pudo haber contratado 90.000 profesionales sanitarios porque «el ministerio de Sanidad solo tiene competencias en las ciudades de Ceuta y Melilla. Sí, justamente las únicas partes de España en las que existe una huelga sanitaria».

En una intervención donde Feijóo se mostró muy cómodo, el «popular» vivió su minuto de oro cuando demostró que todo el discurso optimista de Sánchez se derrumbaba con una sola pregunta.

Si las cosas van tan bien en España, por qué no convoca a elecciones. Si vemos los datos de José Félix Tezanos y sus declaraciones, no se entiende que no tengamos generales en breve,

Indicó el «popular».

Una frase que le robó sonrisas a Miquel Iceta, Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, por lo que el político aprovechó para meter el dedo en la llaga: «Ahí tiene ministros inteligentes que se están riendo...».

De ahí que lo rematara con un contundente: «Es imposible ganarle en demagogia».

«No tiene autoridad»

Feijóo aprovechó su intervención para recordarle la pérdida del poder adquisitivo de todos los españoles, el incremento de la carga fiscal, la nefasta gestión del COVID, los trenes que no caben por los túneles, la huelga de la Justicia y hasta a Tito Berni.

Demostrando la ruptura del Gobierno, el líder del PP recuperó las palabras



de Ione Belarra e Irene Montero contra la reforma de la Ley del «solo sí es sí», donde aseguran que ahora las víctimas de una agresión sexual se enfrentarán a un «calvario probatorio».

De ahí que, además de pedirle que rechazara dichas declaraciones

(cosa que se negó a hacer el presidente del Gobierno), Feijóo le indicase: «O cesa a alguien o váyase usted (...) porque le avergüenza corregir las equivocaciones de sus ministros, pero el problema es que usted no tiene autoridad para cesar a nadie».

In dubio pro okupa

«La alternativa a la sociedad de propietarios es una de súbditos, en la que la prosperidad del Estado se construye a costa de las libertades del pueblo»

Guadalupe Sánchez (*El Subjetivo*)

Licenciada en Derecho, abogada en ejercicio

La propiedad es un derecho inherente a la dignidad del ser humano. Por supuesto que hay quienes deciden prescindir de sus posesiones o relativizan su importancia, pero se trataría en todo caso de una renuncia voluntaria, no impuesta por el Estado. Las democracias occidentales, en tanto que articuladas en torno a la figura del individuo como sujeto de derechos, reconocen y garantizan la propiedad privada (véase el artículo 33 de la Constitución Española o el 17 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea).

Sólo en las naciones donde se protege y ampara jurídicamente la propiedad privada es posible la prosperidad en libertad. Por más que el mainstream intente demonizarla, lo cierto es que la alternativa a la sociedad de propietarios es una de súbditos, en la que la prosperidad del Estado se construye a costa de las libertades del pueblo. Cuando en nombre del bien común se despoja al individuo de aquello que legítimamente posee sin mediar justa compensación, el Estado muestra su rostro más despótico.

La vivienda es una de esas causas nobles que los enemigos de la libertad suelen abanderar para cuestionar y atacar la propiedad privada. Se les llena la boca hablando de un derecho a la vivienda que, como tal, no existe ni en nuestra Carta Magna ni en el constitucionalismo occidental. Efectivamente, la Constitución no configura la vivienda como un derecho subjetivo que confiere una acción a los ciudadanos en reclamación de una morada digna y adecuada, sino que fue concebida como un derecho social, esto es, una directriz que



debe orientar e informar la política económica y social de nuestros poderes públicos (artículo 47).

La ley de vivienda diseñada por nuestro gobierno de izquierdas con sus apoyos parlamentarios, en el que los socialistas cohabitan con chavistas, peronistas y comunistas, evidencia que quienes

legislan se han propuesto cargar sobre los hombros de los españoles propietarios los costes de sus políticas en materia de acceso a la vivienda. En nombre de la protección de los inquilinos se pretende aprobar un texto de vacía de contenido el derecho a la propiedad privada de quienes deciden ofertar su vivienda en el mercado de alquiler.

Aunque los juristas circunscribimos el fenómeno okupa al ámbito penal, referido al delito de usurpación de bienes inmuebles, lo cierto es que coloquialmente el término se utiliza también para hacer referencia a aquellos supuestos en los que el inquilino se niega a abandonar la vivienda aun a pesar de no hacer frente a los correspondientes pagos. En la medida en la que existiría un vínculo jurídico entre arrendador y arrendatario que habilitó a este último a tomar posesión del inmueble, no nos hallaríamos ante un crimen, lo que determina que la jurisdicción competente para conocer del litigio no sea la penal, sino la civil, a través de un procedimiento conocido como desahucio.

Y si bien es cierto que la usurpación de viviendas no presenta ratios alarmantes, las demandas de desahucio por incumplimiento contractual colapsan los juzgados civiles, lo que se traduce en dilaciones en el desalojo que generan enorme incertidumbre y perjuicios a los propietarios. La pandemia supuso un punto de inflexión, pues por la vía del real decreto se suspendieron las ejecuciones de las sentencias y los desalojos. Algo que, para mi sorpresa, avaló el Tribunal Constitucional a pesar de que nuestra Constitución establece que esa herramienta legislativa no podrá afectar a derechos fundamentales, como sería la tutela judicial efectiva.

Esta ventana de oportunidad está siendo aprovechada por el Ejecutivo, que pretende dificultar mucho más a los arrendadores el camino para recobrar la posesión del inmueble alquilado tras producirse el incumplimiento del contrato. La nueva Ley de Vivienda empieza calificando como gran tenedor –parece el nombre de un restaurante– a quien ostente la titularidad de diez o más

inmuebles de uso residencial, que pueden reducirse a cinco en zonas con un mercado residencial «tensionado». Pues bien, la ley topa los precios del alquiler de aquellos contratos en los que el arrendador sea un gran tenedor. No importa a nuestros dirigentes ni la causa de la adquisición –herencia o compraventa– ni el valor de los inmuebles, porque el umbral de lo que nuestro gobierno considera «los ricos» comienza a solaparse con el de la clase media.

Dado que la calificación de «mercado residencial tensionado» corresponde a las autonomías, no son pocos los dirigentes de las comunidades autónomas que han anunciado que no la aplicarán. Pero Sánchez sabe que cuenta con el as en la manga que necesita para terminar con el contrapeso competencial autonómico: el Tribunal Constitucional. Ha afirmado que «la Ley de Vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios del país», anticipando así la que probablemente será la decisión de los de Pumpido, que no dudarán en ventilarse con algún argumento peregrino la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Garantías respecto a esta cuestión.

Además, se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que una vez entre en vigor este engendro normativo, se inadmitirán las demandas que pretenden la recuperación de la posesión de una finca por el arrendador si éste no acredita que no concurre en él la condi-



ción de gran tenedor –aportando las pertinentes certificaciones registrales– y si no especifica si el inmueble es la vivienda habitual de la persona ocupante. Además, si el demandante es un gran tenedor, le corresponderá acreditar si el inquilino se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica.

De esta forma, al arrendador demandante no sólo le corresponde acompañar a la demanda los documentos en los que sustenta su pretensión, sino también los que sirven para impedir, extinguir o enervar la eficacia jurídica de su propia reclamación, invirtiendo así las normas de la carga probatoria que rigen en el proceso civil: de igual forma que en materia penal rige el in dubio pro reo, los desahucios se regirán por la máxima in dubio pro okupa.

Se trata de un tremendo disparate que profundiza en esa inseguridad jurídica que denunció Ferrovial cuando anunció el traslado de su domicilio social a los Países Bajos y que tanto incomodó al Gobierno por la mala imagen que se trasladaba de nuestro país. Pero lo cierto y verdad es que, al igual que sucedió con la despenalización de la sedición, la propuesta Ley de Vivienda pretende vaciar de contenido nuestra Constitución por la puerta trasera, sin acudir a los procedimientos agravados de reforma.

Mientras ejecutan este cambio de régimen delante de nuestras narices, se dedican a anunciar decenas de miles de viviendas públicas. Tras el último CIS de Tezanos, alguien en Moncloa ha decidido que electoralmente es mejor contar viviendas que violadores beneficiados por la rebaja de penas de la ley del sí es sí.

La industria española y el tabú nuclear

Jesús Cacho (*Vozpópuli*)

El debate nuclear está de vuelta en Europa. Casi en paralelo al cierre de los tres últimos reactores que Alemania tenía en servicio, –Isar 2, Neckarwestthiem 2 y Emsland–, hecho ocurrido el pasado sábado, en varios países de la UE se anunciaban proyectos para la construcción de nuevas centrales destinadas a asegurar en el medio y largo plazo la independencia energética, clave del arco sobre la que descansa el progreso material, vale decir el nivel de vida la gente, la capacidad de un país para crecer y crear empleo, por un lado, y las libertades, las libertades de sus nacionales, la independencia en definitiva de los Estados europeos, por otro, valores que la decisión de Alemania, y subsidiariamente del resto de la Unión, de subcontratar su aprovisionamiento energético al petróleo y el gas rusos había puesto en almoneda, como la invasión de Ucrania por el dictador Putin ha puesto de manifiesto. De modo que cierra Alemania –de cuyo Gobierno forma parte el partido Los Verdes–, y Finlandia anuncia la entrada en servicio de la central de Olkiluoto 3, la más potente de Europa (1.600 MWe), y el primer ministro polaco anuncia la ubicación de las primeras siete «minicentrales» de las 79 que proyecta construir, la primera de las cuales podría comenzar a funcionar a finales de 2028, y Suecia dice otro tanto, y lo mismo una Holanda que hace tiempo había dado carpetazo al átomo y, claro está, Francia, la nación nuclear por antonomasia, reafirmando su intención de convertir el mix nuclear-renovables al 50% en la columna vertebral de su aprovisionamiento energético.

La Europa dividida por la sima nuclear o la traslación al campo de la energía de la vieja rivalidad franco alemana, las dos grandes economías de la UE. La Francia nuclear y la Alemania que, tras el accidente de Fukushima en 2011, decide proceder al cierre programado de sus centrales bajo el Gobierno de Angela Merkel, una iniciativa suicida para muchos alemanes, que condena al país a quemar carbón –un sacrilegio para esa burocracia de Bruselas dispuesta a sacrificar el futuro del continente en el altar de la «descarbonización» acelerada y la adoración al Dios del medio ambiente– a corto plazo y a depender en el largo de las importaciones de fuel, porque nadie se cree, hoy por hoy, que las renovables vayan a ser capaces de asegurar el suministro cuando no hay sol ni sopla el viento. Seguramente



la suerte de la energía nuclear en el continente europeo dependerá en gran medida de lo que ocurra en Francia en esta materia. ¿Cómo decidió el país vecino frenar o incluso desmantelar su capacidad de producción nuclear, un parque único en el mundo construido como consecuencia de la primera crisis del petróleo, que fue capaz de asegurarle durante décadas un suministro fiable, libre de carbono y barato en términos de producción eléctrica?

En París, la comisión de investigación sobre «los motivos de la pérdida de la soberanía energética» impulsada en su día por el presidente Macron acaba de entregar su informe al Gobierno. Como ocurriera en Alemania, el accidente de Fukushima alteró el equilibrio de fuerzas dando alas al ecologismo



y llevando al Partido Socialista a dar la espalda al credo nuclear sostenido por Mitterrand e incluso por Jospin, de modo que en noviembre de 2011, el PSF y Europe Écologie-Les Verts (EELV) firmaron un acuerdo destinado a reducir la participación nuclear en la producción de electricidad del 75% de entonces al 50% en 2025, así como la reducción de un tercio

de la energía nuclear instalada mediante el cierre gradual de 24 reactores, empezando por el inmediato de Fessenheim. No faltaron las advertencias. La Unión Francesa de la Electricidad (UFE) consideró que «en el escenario propuesto de reducción de la producción de energía de origen nuclear al 50%, y al 20% en caso de cierre de los reactores al cumplir los 40 de vida útil, las energías renovables no pueden sustituir completamente a la nuclear. Para 2030, es imposible eliminar la energía nuclear, siquiera parcialmente, sin aumentar las emisiones de CO₂».

Macron, inesperado ganador de las presidenciales de 2017, asumió el acuerdo alcanzado por socialistas y verdes en 2011, ratificado después en 2015. Pero el elefante del parque nuclear francés, condenado a su desaparición al ir cumpliéndose la jubilación de los reactores, nunca terminó por abandonar la habitación. Primero fue el aplazamiento a 2035 del recorte al 50% de la producción de energía de origen nuclear, después la idea de un cambio total de rumbo que empezó a abrirse paso tras la sospecha presidencial de que, más que una consecuencia de la ecología/ideología antinuclear, ese 50% respondía en realidad a una insidiosa promoción del decrecimiento económico. En noviembre de 2018 Macron pide al gigante público EDF que trabaje en un nuevo programa de desarrollo nuclear civil que debería estar listo para 2021. La señal de partida la dio el propio presidente en su discurso en Belfort el 10 de febrero de 2022 («Necesitamos retomar el hilo de la gran aventura de la energía nuclear civil en Francia»), con el anuncio de construcción de seis reactores EPR 2 (European Pressurized Reactor, reactor de agua a presión) y otros ocho en estudio, a cuenta de un significativo aumento del consumo eléctrico previsto. El 3 de febrero pasado, Agnès Pannier-Runacher,

ministra de Transición Energética del Gobierno Borne, habló de liberar la potencia de los reactores existentes, ampliar su vida útil más allá de los 60 años y plantear la construcción de más de los 14 EPR prometidos. La muerte decre-



tada por socialistas y verdes para la energía nuclear francesa pasaba a mejor vida por culpa de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

El daño para la industria provocado por años de dudas, vacilaciones y frenazos es, sin embargo, más que evidente. Para el físico Yves Bréchet, ex Alto Comisionado para la Energía Atómica gala y actual director científico de Saint

Gobain, «la procrastinación en el campo de la energía nuclear y la política de anuncios, a la espera de decisiones concretas, demuestran una asombrosa ignorancia de la inercia intrínseca de las industrias pesadas». Después de que, como consecuencia del plan Messmer de 1974, Francia fuera capaz de poner en servicio una media de más de dos reactores nucleares al año en los ochenta y noventa, todos los palos posibles han caído sobre un sector que ha sido víctima de una política energética miope. «Llevamos sin proyectos veinte años que han sido fatales para la transmisión del conocimiento técnico», denunció ya en 2018 Pierre-Franck Chevet, ex presidente de la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa. Ruptura de la cadena de transmisión de conocimiento y pérdida de equipos humanos especializados. Aniquilación de un expertise tecnológico fundamental para la competitividad de cualquier economía.

En Francia se habla ya del «proyecto industrial del siglo», un esfuerzo gigantesco capaz de poner en marcha la deteriorada maquinaria industrial gala, obligada a atender en paralelo la operativa del parque nuclear actual, los trabajos de las nuevas centrales (la primera estará situada en la eléctrica de EDF en Penly, Seine-Maritime, con su entrada en servicio en 2035), las operaciones de desmantelamiento previstas, los proyectos de exportación, y el desarrollo de nuevos tipos de reactores como los SMR (pequeños reactores nucleares). Para hacer frente al reto, la pública EDF prevé la creación de unos 150.000 puestos de trabajo a lo largo de la década, el aumento de la plantilla del sector en cerca de 300.000 personas, con una gran demanda de ingenieros, pero también de oficios olvidados o devaluados tales como soldadores, herreros, caldereros, especialistas en construcción, etc. En el desarrollo del nuevo programa, la industria nuclear deberá competir con otros sectores, pero su resurgimiento alimentará la reindustrialización del país de forma generalizada, en un proceso que incidirá directamente sobre campos como la ingeniería civil, la aeronáutica, la defensa, la industria espacial o la automoción. Alguien ha hablado de la necesidad de poner en marcha un verdadero «plan Marshall» de capacitación tecnológica para hacer frente a un desafío que también lo será económico, con un coste estimado en alrededor de 60.000

millones, con cerca de 4.000 empresas involucradas, cientos de miles de profesionales y décadas de trabajo, todo orientado a asegurar la independencia energética de Francia durante el siglo XXI.

También España había logrado desarrollar una tecnología nuclear propia, que se empezó a perder en el momento en que el Gobierno de Felipe González decretó la famosa «moratoria nuclear», un parón que afectó incluso a los proyectos en desarrollo y que se incluyó en el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. Las nucleares españolas, capaces de asegurar el desarrollo económico del país durante muchas décadas y que a día de hoy son todavía fuente del 22% de la electricidad que se consume en España, también eran «franquistas» y por tanto había que acabar con ellas. La clausura gradual y escalonada acordada en 2019 por el Gobierno Sánchez con las grandes eléctricas de los siete reactores que siguen funcionando contempla el cierre de Almaraz I en 2027, de Almaraz II en 2028, de Ascó I en 2030, de Cofrentes en 2030, de Ascó II en 2032, y de Trillo y Vandellós II en 2035. Un cierre en el que coinciden los mantras ideológicos del Ejecutivo social comunista y los intereses de las propias empresas a cuenta de la gran carga fiscal que soportan las plantas.

El veto de España a las nucleares le condena a una dependencia total del gas, puesto que, como ayer mismo aseguraba aquí Fernando Díaz Villanueva, «las renovables sólo son capaces de aportar en torno al 40% de la energía eléctrica que consume el país», un gas, por lo demás, que España está obligada a importar, lo que debería forzar a los poderes públicos en particular y a la sociedad española en general a la búsqueda urgente de soluciones alternativas.



Es verdad que los llamados «reactores de tercera generación» presentan mejoras evolutivas muy notables sobre las actuales centrales en lo que a seguridad, fiabilidad, operatividad y estandarización de los diseños se refiere, ventajas todavía más notorias en los reactores modulares de pequeño tamaño (SMR) o «mini centrales» como se les conoce, en los que están trabajando ya muchos de nuestros socios de la UE. Pero también lo es que el miedo atávico al átomo sigue muy presente en el inconsciente colectivo de los españoles, miedo plenamente comprensible, incluso respetable, y que solo se podrá vencer a base de información seria y veraz. Lo que no es explicable en modo alguno es el silencio que en España rodea un asunto de importancia estratégica tan vital. La total ausencia de debate, en contraste con lo que ocurre en Francia, por ejemplo. El impenetrable tabú de lo nuclear –«un tabú adoptado esencialmente en España por la izquierda, pero respetado por la derecha», según afirmaba el viernes aquí Carlos Martínez Gorriarán–, en un país que debería aspirar a alcanzar ese mix que conforman nuclear y renovables convertido hoy en desiderátum por una mayoría de expertos, teniendo en cuenta sobre todo nuestra total dependencia del exterior en lo que a combustibles fósiles se refiere.

España tiene por delante un reto de la máxima importancia del que depende el futuro de su economía y el bienestar económico de sus ciudadanos. Me refiero a la necesidad de proceder a la reindustrialización de un país que, con excepción quizá de un sector tan maduro como el del automóvil, es hoy un auténtico desierto industrial. Una cuestión de prioridades, cierto, a menos que, naturalmente, los españoles opten por convertirse de hoz y coz en camareros dispuestos a tirar con mucho arte las «cañas» que se van a tomar los turistas extranjeros. Desde este punto de vista, un nuevo programa que contemplara la construcción de una nueva serie de reactores del tipo EPR2 o SMR supondría una oportunidad única para relanzar esa ansiada reindustrialización movilizand o al tiempo todos los resortes materiales, tecnológicos e incluso emocionales de una sociedad como la española, hoy aparentemente dormida en mitad de la nada. No hay ahora mismo ningún proyecto en marcha en España de una cierta dimensión económica o tecnológica, ninguno. Un auténtico páramo. El Gobierno Sánchez tiene bastante con emplearse a fondo en convertir este país en campo de prueba para cualquier tipo de aberración ligada a las ideologías de género y similares. Y en crear una sociedad adicta a todo tipo de subvenciones.

Pero España no puede esperar. Lo asombroso aquí, repito, es el silencio impenetrable que rodea a las cosas importantes, las trascendentes, las que atañen al futuro de un país que hoy se desliza cual balsa de piedra hacia la irrelevancia. Hacia esa insignificancia que acarrea la pobreza. Nuestro país está obligado a encontrar sus propias soluciones energéticas, sin fiar tema tan esencial a lo que decida en Bruselas una UE donde prima el interés de los grandes sobre un proyecto común en pleno proceso de dilución, y mucho menos puede seguir cual lazarrillo a Alemania, país muy dado al suicidio periódico masivo, en su decisión de eliminar la energía nuclear para fiarlo todo a las importaciones de gas ruso. Abrir de inmediato ese debate debería ser obligación prioritaria, tanto o más que la lucha contra el déficit o la reducción de la deuda, de un eventual Gobierno Feijóo, forzado a bucear en todas las soluciones energéticas posibles para alcanzar la seguridad de suministro a un coste razonable, y ello como una cuestión de Estado. «El día de hoy pasará a la historia de Polonia, porque nuestro país necesita una fuente de energía permanente, limpia y barata», afirmaba el lunes pasado en Varsovia el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. ¿Cuándo llegará ese día para España?
